

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 6 á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte, por trimestres adelantados.—Números sueltos á 12 cuartos el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRIMERA SECCION.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la REINA nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan en esta córte sin novedad en su importante salud.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

REALES DECRETOS.

De acuerdo con mi Consejo de Ministros, Vengo en admitir á D. Antonio Cuervo la dimision que, fundada en el mal estado de su salud, ha hecho del cargo de Gobernador de la provincia de Santander para que fué nombrado por mi Real decreto de 12 del actual; declarandole cesante con el haber que por clasificacion le corresponda y proponiéndome utilizar oportunamente sus servicios.

Dado en Palacio á 14 de noviembre de 1862.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

De acuerdo con mi Consejo de Ministros, Vengo en nombrar Gobernador de la provincia de Santander á D. Francisco Martinez Mondelo, Secretario del Gobierno de la de Valencia.

Dado en Palacio á 14 de noviembre de 1862.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL DECRETO.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Palencia y el Juez de primera instancia de Saldaña, de los cuales resulta:

Que los representantes de las justicias, los concejos y vecinos de las villas de Villasila y Villamelendro y de Villaeles, reunidos el dia 10 de agosto de 1740 en

el sitio y pago del Sato, término jurisdiccional de Villaeles, acordaron de conformidad el modo de hacer y reparar la presa que la villa de Villasila y Villamelendro y sus vecinos tienen en el rio para el gobierno de su vega y molinos, y tambien fijaron los hitos de la referida presa y de su término para el gobierno de sus aguas y su mejor disfrute y aprovechamiento, expresando que si el rio llevase los hitos fijados ó si se hiciese necesario poner la presa fuera de éstos, quedaria obligada la villa de Villaeles á dar licencia para ello, pagando los vecinos de Villasila y Villamelendro la cantidad en que se conviniese, y no de otra manera:

Que con presencia de este acuerdo, el Teniente de Alcalde, en funciones de Alcalde de Villasila autorizado en 30 de enero del corriente año por su Ayuntamiento, encargó á diferentes operarios la reparacion y construccion de la presa, varias veces destruida por las corrientes:

Que con fecha 13 de marzo siguiente el Alcalde de Villaeles interpuso ante el Juez de primera instancia de Saldaña un interdicto que pidió que se sustanciara sin audiencia de los despojantes, en queja de que diferentes sujetos habian construido un cauce y presa en terreno llamado el Canto-abajo, sito en término de la misma villa de Villaeles, perturbándola en su posesion y en el aprovechamiento de sus pastos:

Que admitido por el Juez el interdicto sin perjuicio de que acreditase el Alcalde hallarse legitimamente autorizado para litigar, el Gobernador de la provincia, excitado por el Ayuntamiento de Villasila y Villamelendro, y conforme con el Consejo provincial, promovió y sostuvo la presente competencia:

Vistas las Reales órdenes de 22 de noviembre de 1836 y 20 de julio de 1839, que encargan á los Jefes políticos (hoy Gobernadores) el cuidado de la observancia de las ordenanzas, los reglamentos y disposiciones superiores, referentes á la conservacion de las obras, puestas, distribucion de aguas para riegos molinos y otros artefactos:

Visto el Real decreto de 29 de abril de 1860, en cuyo art. 23 se dispone que todas las cuestiones relativas al aprovechamiento de aguas que se promuevan sobre deslinde de los cauces y terrenos adyacentes, serán del conocimiento de la Administracion, salva la competencia de los Tribunales ordinarios en las que afecten exclusivamente á la propiedad:

Visto el art. 8.º párrafo 8.º de la ley de 2 de abril de 1845, en que se establece que los Consejos provinciales actuarán como Tribunales en los asuntos administrativos, y bajo tal concepto oiran y fa-

llarán cuando pasen á ser contenciosas las cuestiones relativas al uso, navegacion y flote de los rios y canales, obras hechas en sus cauces y márgenes y primera distribucion de sus aguas para riegos y otros usos;

Considerando que tratándose de obras hechas en las márgenes de los rios y sus terrenos adyacentes para un aprovechamiento de aguas que responda á intereses colectivos de la agricultura, y de cumplimiento de acuerdos ó concordias entre dos pueblos sobre esas aguas para el mismo aprovechamiento, el Alcalde de Villaeles ha tenido expedido el recurso con arreglo á las disposiciones citadas, ante la Autoridad administrativa, en la línea gubernativa y en la contenciosa, pero no ha podido acudir á la jurisdiccion ordinaria, á no ser sobre la propiedad en el correspondiente juicio plenario:

Conformándome con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno, Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administracion.

Dado en Palacio á 12 de noviembre de 1862.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernacion, José de Posada Herrera.

MINISTERIO DE LA GUERRA.

Número 20.—Circulares.

Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Administracion militar lo que sigue:

«Enterada la Reina (Q. D. G.) del escrito de V. E. de 13 de setiembre último consultando la aplicacion del gasto que ocasiona el uso de baños de aguas minerales tomados en los hospitales militares con motivo de haberse dispuesto en el de Barcelona que se faciliten á un oficial retirado existente en el mismo; S. M. de acuerdo con lo informado eu 11 del actual por el Director general de Sanidad militar y por resolucion de 23 del mismo, se ha dignado mandar que estando dispuesto se provea por las boticas de los hospitales militares cuantos artículos tengan el caracter de medicamentos, ya se administren con alguna preparacion farmacéutica ó en su estado natural, y perteneciendo á esta última clase los baños minero-medicinales que se usen en los referidos establecimientos, el gasto que produzcan debe ser de cuenta de las boticas y cargarse á la estancia medicinal, recomendándose á los Profesores médicos que limiten la prescripcion de esta clase de remedios á los casos que no puedan ser reemplazados por otros para llevar

las indicaciones que se pretenda satisfacer con aquellos.»

De Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de octubre de 1862.—El Subsecretario, Francisco de Uztáriz.—Señor.....

Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Administracion militar lo que sigue:

«Establecido por Real orden de 5 de agosto último el sistema de que la licitacion pública para los artículos del suministro de provisiones se verifique por medida ponderal, y en vista de lo propuesto por V. E. en escrito de 14 de octubre próximo pasado; S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha dignado mandar que desde el momento que se suministre la cebada que haya sido adquirida por otro sistema, se verifique tambien por peso su distribucion á los cuerpos é Institutos del ejército, debiendo ser de ocho y media libras el respectivo á la racion ordinaria y el de once libras el de la extraordinaria, interin no se completa la adquisicion de los tipos métricos y se ajusta dicho suministro á las nuevas tarifas generales de provisiones y utensilios.»

De Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de noviembre de 1862.—El Subsecretario, Francisco de Uztáriz.—Señor.....

(Gaceta de 22 de noviembre último)

SEGUNDA SECCION.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA.

CIRCULAR NUMERO 485.

Mandando que los visitadores de papel sellado, encargados de descubrir los depósitos que obren en poder de establecimientos y particulares, procedan con sujecion á las reglas que se dictan.

Seccion 6.ª—Negociado único.—Hacienda.

Por la Direccion de la Caja general de Depósitos en circular de 15 del mes último se dice á este Gobierno lo que sigue:

Con fecha 10 de octubre próximo pasado se ha comunicado á esta Direccion general la Real orden siguiente:

«Excmo. Sr.:—Por el Ministerio de Hacienda se dice con esta fecha al Direc-

... general de Rentas Estancadas la que
... Sr. Ministro (D. G.) en vista
... de una consulta elevada a este Ministe-
rio por la Direccion de la Caja general
de Depósitos, se ha servido mandar que
los Visitadores del papel sellado, al pro-
pio tiempo que desempeñen las funcio-
nes de su cometido, se ocupen en des-
cubrir los depósitos que obren en poder
de los establecimientos y particulares, y
de haberlos pasado a la Caja general y
sus sucursales en las provincias con
arreglo a lo prevenido en los Reales de-
cretos de 29 de setiembre de 1852,
22 de julio de 1855 y 12 de mayo
de 1861; debiendo proceder en este
encargo con sujecion a las reglas que al
efecto le diere la misma Direccion.—
De Real orden lo digo a V. I. para los
efectos correspondientes.—De la propia
Real orden, comunicada por el referido
Sr. Ministro, lo traslado a V. E. para
iguales fines »

Lo que traslado a V. para su conoci-
miento y a fin de que se sirva disponer
que los Visitadores de papel sellado de
esa provincia, al propio tiempo que ejer-
zan las funciones de su cometido, obser-
ven con relacion a las operaciones de la
Caja de Depósitos las reglas siguientes:
1.º En todos los casos en que hayan
de girarse visitas parciales o generales,
de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 76 de la Instruccion de 10 de
noviembre de 1851, para llevar a efecto
el Real decreto de 12 de setiembre del
mismo año, en virtud del cual se refor-
ma la legislación del papel sellado, se
considerará objeto especial el averiguar
al propio tiempo, si se han consignado
depósitos judiciales o administrativos fue-
ra de la Caja general de Depósitos o sus
dependencias.

2.º Las visitas en la parte que afec-
ta a la Caja, tendrán lugar en las capi-
tales de provincia y pueblos de la misma,
averiguando del examen que ha de ha-
cerse de los protocolos, causas y pleitos
existentes en los Escribanías de Cámara
de las Audiencias y Tribunales superio-
res y en las de los Juzgados y públicas
de número, si se han consignado depósi-
tos en metálico o papel de la Deuda
y del Tesoro en establecimientos de Ban-
cos o particulares.

3.º Los Visitadores examinarán igual-
mente los expedientes de subastas de
servicios públicos, para ver si se han
constituído los depósitos necesarios que
deban tener lugar.

4.º No se girarán visitas a los Bancos
y Sociedades de crédito legalmente esta-
blecidas, ni a las oficinas de particulares,
para averiguar si han admitido depósitos
indebidamente.

5.º Cuando por resultado de las visi-
tas giradas a las dependencias marcadas
en la prevencion 2.º de la presente Ins-
truccion, por investigación reservada o
por denuncia se conozca la existencia
de algun depósito indebido en los Bancos,
Sociedades u oficinas de particulares, el
Visitador procederá a dar cuenta a la
Direccion en la forma que mas adelante
se establece.

6.º Las actas y expedientes de visita
por la respectiva de depósitos se exten-
derán independientemente de las del pa-
pel sellado, y se remitirán para su apro-
bacion a la Direccion de la Caja general
por conducto de los Gobernadores de
provincia.

7.º De las visitas que hayan de girarse
en virtud de lo dispuesto en la preinserta
Real orden se dará conocimiento a esta
Direccion general a los efectos oportunos,
debiendo cumplirse este servicio en la
parte que no está terminada, con su-
jecion a las disposiciones contenidas en
la Instruccion citada de 10 de noviembre
de 1851.

Lo que, con insercion a esta continua-
cion de las disposiciones contenidas en los
Reales decretos citados en la Real orden

preinserta y que tienen relacion con las
visitas que en su cumplimiento han de
girarse, se hace público para conoci-
miento de los Establecimientos y particu-
lares a quienes convenga. Orense 1.º de
diciembre de 1862.—Francisco Javier
Camuño.

Disposiciones contenidas en los Reales
decretos citados en la Real orden inserta
y que tienen relacion con las visitas
que en su cumplimiento han de
girarse.

Real decreto de 29 de setiembre de 1852.

Artículo 1.º Se establezca en Madrid
una Caja general de Depósitos separada
de las del Tesoro público y regida por
una Administracion especial.

Para el objeto de su institucion serán
dependencias de esta Caja en las capita-
les de provincia y de partido administra-
tivo las Tesorerías y Depositarias de Ha-
cienda pública.

Artículo 2.º Ingresarán en esta Caja
ó en sus dependencias los fondos en me-
tálico y los efectos de la Deuda pública
y del Tesoro que deban consignarse en
depósito por decisiones de la Adminis-
tracion ó disposicion de los Tribunales
de Justicia, para fianzar contratos que
se refieran a servicios generales, provin-
ciales ó municipales, para asegurar el
ejercicio de cargos y funciones públicas,
ó para cumplir obligaciones legales de
interés público ó privado, cuando no
haya parte interesada que, con derecho
para ello, exija la consignacion en otro
lugar.

Artículo 3.º Las Autoridades y los
Tribunales no permitirán ni ordenarán
consignacion alguna en ninguna otra
parte, ni considerarán cumplidas las
obligaciones de que procedan las que,
contra lo prevenido en el artículo ante-
rior, se hicieren fuera de la Caja general
de Depósitos ó de sus dependencias.

Artículo 4.º Los fondos en metálico
procedentes de los conceptos mencionados
en el artículo 2.º que en virtud de
disposiciones administrativas existan
actualmente en calidad de depósito en
los Bancos ó en poder de otros deposita-
rios, se trasladarán desde luego a la
Caja general, conservándose en ellos las
cantidades depositadas en virtud de pro-
videncias judiciales, si los interesados no
reclamaren su traslacion a la Caja ge-
neral.

Tambien se conservarán hasta que
deba hacerse su devolución, los valores
de la Deuda pública ó de otra especie que
hubieren recibido.

Real decreto de 22 de julio de 1855.

Artículo 1.º Se formará una estadís-
tica general de todos los depósitos nece-
sarios, así administrativos como judicia-
les, que estén actualmente constituidos
en el Reino en metálico ó efectos de la
Deuda pública y del Tesoro, ya sea para
garantizar contratos, cargos públicos ó
cualquiera otras obligaciones legales ó
personales, ó ya procedan de cantidades
litigiosas ó de cualquiera otro concepto.

Artículo 10.º Se abrirán registros ge-
nerales en la Caja central de Depósitos
de todos los que resulten pendientes; y
el Director de la misma tomará por sí ó
propondrá en su caso al Ministerio de
Hacienda las medidas que sean necesarias
a fin de que ingresen en la Caja central
ó en sus dependencias todos los depó-
sitos necesarios que por cualquier mo-
tivo no hayan tenido entrada hasta ahora
en ellas, a pesar de lo prevenido en mi
Real decreto de 29 de setiembre de 1852.

Real decreto de 12 de mayo de 1861.

Artículo 16.º Los establecimientos y
particulares que conserven en su poder
depósitos que, con arreglo a los Reales
decretos de 29 de setiembre de 1852 y
22 de julio de 1855, han debido con-
-

tribuirse en la Caja general ó sus sucursales,
los ingresarán en éstas en el término
de un mes, incurriendo en otro caso en
la multa de un 10 por 100 del importe
del depósito. Para descubrir después de
dicho plazo los depósitos que deban in-
gresar en la Caja general, el Ministerio
de Hacienda organizará los medios de
investigacion que considere oportunos.

SECCION DE FOMENTO.

CIRCULAR NUM. 186.

Montes.

El Excmo. Sr. Ministro de Fomento
con fecha 3 de noviembre último me dice
de Real orden lo que copio:

Al Director general de Agricultura,
Industria y Comercio digo con esta fe-
cha lo que sigue:

Nmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido en esa Direccion general con mo-
tivo de las dudas consultadas por varios
Gobernadores, acerca de si deben con-
siderarse vigentes en su parte penal las
ordenanzas generales de montes de 22
de diciembre de 1833, y comprendidas
por lo tanto sus disposiciones en la excep-
cion que contiene el artículo 7.º del Có-
digo penal:

Visto el informe que en sentido afir-
mativo han evacuado con fecha 16 de
setiembre de este año las Secciones de
Gobernacion y Fomento y Estado y Gra-
cia y Justicia del Consejo de Estado;
S. M. la Reina (q. D. g.), de conformi-
dad en un todo con la doctrina estableci-
da en el expresado dictamen, ha tenido
a bien mandar que sin perjuicio de exor-
tar al Ministerio de Gracia y Justicia para
que de acuerdo con la misma doctrina
comunique a las autoridades judicia-
les las instrucciones que crea convenientes
a fin de evitar la impunidad en que
quedan hoy muchos de los delitos que
se cometen en los montes, se advierte
desde luego a los Gobernadores de pro-
vincia para que en lo concerniente al
ejercicio de su autoridad administrativa
les sirva de regla en lo sucesivo:

Primero. Que la parte penal de las
ordenanzas generales de montes se halla
vigente respecto a los que son propiedad
del Estado, de las provincias, de los pue-
blos ó de corporaciones de carácter pú-
blico.

Segundo. Que siempre que la auto-
ridad judicial se declare incompetente en
el conocimiento de algun daño cometido
en los montes públicos por no conside-
rar vigentes las ordenanzas, que merecen
el castigo y correccion a los Tribunales
de justicia cuando no cabe imponerle
gubernativamente segun lo dispuesto en
el Real decreto de 18 de mayo de 1833,
establece una competencia legal de
jurisdiccion y atribuciones que se senten-
ciará y dirimirá con sujecion a las re-
glas establecidas en el Real decreto de
4 de junio de 1847.

Lo que he dispuesto se inserte en
este periódico oficial para su debido
publicidad. Orense 4 de diciembre de
1862.—Francisco Javier Camuño.

SECCION DE FOMENTO.

CIRCULAR NUM. 187.

Montes.

El Excmo. Sr. Ministro de Fomento
con fecha 5 de noviembre último me dice
de Real orden lo que copio:

Al Gobernador de la provincia de Pa-
lencia digo con esta fecha lo siguiente:

Vista la comunicacion dirigida a V. S.
por el Ingeniero don Montez de Mesa, pro-
vincia y que V. S. remitió con aprobo a
este Ministerio en 13 de marzo último,
manifestando la necesidad de adoptar al-
gunas providencias para evitar los daños
que causa al arbolado de los montes el
humo producido por la carbonizacion de
la uña que en grandes cantidades bene-
ficien las empresas mineras de esa pro-
vincia.

Visto lo informado sobre el particular
por las juntas facultativas de montes y
dominios.

Vistos los artículos 154 y siguientes
de las ordenanzas generales de montes:

Considerando que la libertad que da
la ley de minería para el beneficio de
los minerales, no destruye la facultad de
la Administracion para adoptar en la de
los montes públicos, ciertas reglas de
policía a que habrán de sujetarse todas
las industrias por privilegiado que sea
su ejercicio;

Considerando que establecidas estas
reglas en los artículos antes citados de
las ordenanzas del Remo, y prohibida por
ellas la construccion de ningún horno a
cierta distancia de los montes públicos a
fin de evitar los peligros de un incendio,
están comprendidos en dicha publicacion
los hornos que se destinan al beneficio de
los minerales;

Considerando que en los de esta clase
existe además el doble riesgo de que los
humos que producen perjudiquen al ar-
bolado por la clase del mineral que se
beneficia; S. M. la Reina (q. D. g.) ha
tenido a bien mandar que, respetando los
hornos existentes, con reserva de acor-
dar otra cosa si la experiencia demos-
trase que sus humos causan efectivamen-
te el daño que supone el Ingeniero de
esa provincia, no se permita en adelante
la construccion de ninguno nuevo a me-
nos distancia de mil varas de un monte
público, sin obtener previamente Real li-
cencia, a cuyo fin se instruirá un expe-
diente en que se oirá a los Ingenieros de
Montes y de Minas; y practicare el cor-
respondiente análisis se harán constar
las condiciones del mineral que se inten-
ta beneficiar.

Lo que he dispuesto se inserte en este
periódico oficial para su debido cumpli-
miento. Orense, diciembre 6 de 1862.—
Francisco Javier Camuño.

BANCO AGRICOLA
DE BENEFICENCIA DE ORENSE

En el mes de noviembre último se pa-
saron a los señores Alcaldes las respec-
tivas relaciones de deudores al Banco pa-
ra su cobranza por la vía de apremio,
segun y en los términos que por dife-
rentes disposiciones que se citan en ellas,
está acordado; en otras anteriores que se
les remitieron en el corriente año, hay ya
comprendidos algunos deudores por los
tres plazos que adeudaban entonces y
que no pagaron, yendo en las dichas de
noviembre por los cuatro que están ven-
cidos.

Esta notable falta origina muchísimos
perjuicios al Banco, porque no se cum-
ple estrictamente con su verdadera ins-
titucion que ya eligió el medio parlatino
y proporcional de la cobranza por cuar-
tas partes iguales de capital é intereses, ó
sea por séntestres en dos años; y tambien,
porque siendo corto su capital y viéndose
efecto de la calamidad del Oidium
que affige a la ribera, lleno de pérdidas

de infelices labradores, sup. hijo, regula-
 zado, el cobro, especialmente tiene con
 que atender á una tercera parte, y si se
 desquida, solo tendrá para una insignifi-
 cancia, y á los dueños porque se les
 deja cargar una suma, y si no pueden
 satisfacer, en plazo, ni menos podrá des-
 pues con los otros dando lugar quizá á
 insolencia con notable perjuicio á los
 fiadores: por todas estas consideraciones,
 espero que los señores Alcaldes procuren
 hacer efectivos los descubiertos que figu-
 ran en dichas relaciones en el término
 que les está señalado; transcurrido el que,
 sin verificarlo, me verá en el sensible
 caso de imponerles la responsabilidad
 debida y demás que correspondan.

Espero igualmente, que las instancias
 de pedidos que inscriban, vengán estric-
 tamente, sin lo cual no son admisibles,
 arregladas al modelo é instrucciones que
 se citan en el Boletín, núm. 121 de oc-
 tubre último, las que deben tener muy
 presente.

Ortise diciembre 5 de 1862.—E. G. P.,
 Francisco Javier Camuño.

La Junta del mismo en sesión de 2 del
 corriente concedió bajo las bases esta-
 blecidas, los préstamos en metálico por
 el orden que se señala.

PARTIDO DE ALLARIZ.
 Ayuntamiento de ídem.

	Rs. vn.
Fernando Cid Delgado, de San Esteban.	500
Juan de Casto Rodriguez, de id.	500
Domingo Conde Cid, de id.	500
Gertrudis Cid, de id.	500
D. Micaela Santos, de Santiago.	500
Benito Cid, de Aguas Santas.	500
Juan Cid Fernandez, de id.	500
Ayuntamiento de Baños de Molgas.	
Manuel Vazquez, de San Esteban de Ambia.	500
José Pumar, de Alimpiter.	500
Ayuntamiento de Esgos.	
Ramon Rodriguez Romasanta, de Santa Eulalia.	500
Ayuntamiento de Junquera de Ambia.	
Manuel Novoa, de Junquera.	500
Manuel Conde, de id.	500
Ayuntamiento de Maceda.	
Juan Garrido Froufe, de Zorelle.	500
Ayuntamiento de Paderno.	
Yicenta Ledo, de Paderno.	500
Gregorio Gomez, de id.	500
Antonio Vazquez, de Coucieiro.	500
Ayuntamiento de Taboadela.	
Doña Gumersinda Conde, de Taboadela.	500
PARTIDO DE BANDE.	
Ayuntamiento de Verca.	
José Alvarez, de Bangueses.	500
José Martinez, de id.	500
PARTIDO DE CELANOVA.	
Ayuntamiento de la Bola.	
José Alvarez, de Podentes.	500
José Lorenzo, de Beirédo.	500
Ayuntamiento de Cortegada.	
Manuel Euzimigo, de Refojos.	500
Ayuntamiento de Carille.	
Manuel Perez, de Carille.	500
Ayuntamiento de Freás de Eiras.	
Juan Alvarez, de id.	500

Ayuntamiento de la Merca.	
José Fernandez, de Entrambosios.	500
Manuel Miguez, de Olla.	500
Manuel Tain, de id.	500
Francisco do Campo, de San Pedro da Mezquita.	500
Ayuntamiento de Villan de Infantes.	
Manuel Gomez, de Espinoso.	500
José Fernandez, de Freijo.	500
Ayuntamiento de Villameá.	
Ramon Dominguez, de id.	500
PARTIDO DEL CARBALLINO.	
Ayuntamiento de ídem.	
Andros Fernandez Ameijiras, de ídem.	500
Juan do Cabo, de Veiga.	500
Juan Vazquez, de id.	500
Agustin Alvarez, de Santa Maria de Arcos.	500
Ayuntamiento de Boborás.	
Angel Diaz, de Campeija.	500
José Beuito Vazquez, de Albarellos.	500
Tomasa Corbal, de id.	500
José Pardo, de id.	500
José Lopez Somoza, de id.	500
Benito de Soto, de id.	500
Juan Gallardo, de id.	500
Manuel Ceña Alvarez, de Moldes.	500
José Ojes, de id.	500
Ayuntamiento de Cea.	
Ignacio Vazquez, de id.	500
Manuel Alvarez, de Osara.	500
Ayuntamiento de Irijo.	
Nazario Rivera, de Corneda.	500
Maria Diaz, de id.	500
José Nogueira, de id.	500
Ayuntamiento de Maside.	
Tomas Arias, de Ourantes.	500
Pacundo Rodriguez, de Maside.	500
José de Castro Freijedo, de id.	500
Rafael Cosado, de Louredo.	500
Andrés Vidal, de Barbantes.	500
PARTIDO DE GINZO.	
Ayuntamiento de ídem.	
Francisco Gándara, de Parada de Riveira.	500
Nicolás Rodriguez, de id.	500
Pablo Gándara, de id.	500
Ayuntamiento de Morás.	
Baltasar de Novoa, de Laroá.	500
Ayuntamiento de Porquera.	
Bias Feijó, de Subucedo.	500
Ambrosia Fernandez, de id.	500
Ayuntamiento de Rairiz de Veiga.	
José Jardon, de id.	500
Ignacio Touza, de Congostro.	500
PARTIDO DE ORENSE.	
Ayuntamiento de ídem.	
Manuel Pereira, de Sta. Eufemia del Centro.	400
Antonio Fernandez, de id. del Norte.	400
José Amor, de la Sma. Trinidad.	400
Domingo Pérez, de id.	400
Manuel Fernandez, de Reza.	400
José Novoa, de Salvo.	500
Ayuntamiento de Amoeiro.	
Juan Perez, de id.	500
Manuel Vazquez Ruas, de id.	500
Ramon Caride, de Bouzós.	500
Manuel Caride, de Parada.	500
Ayuntamiento de Barbadianes.	
Eduardo Carvall, de Barbadianes.	500
Rosendo Novoa, de id.	500
José Fernandez Justo, de id.	500
Javier Paico, de Sobrato.	500
Juan Vidal Aranzo, de id.	500

Juan Antonio Lopez, de id.	500
José Vazquez Covelo, de id.	500
Juan Sauto, de id.	500
Genaro do Muro, de id.	500
Ayuntamiento de Canedo.	
Jacinto Fernandez Gonzalez, de id.	500
Isabel Gallego, de Arrabaldo.	500
Ayuntamiento de Coles.	
Rosa Gonzalez, de Sta. Marina de Alban.	500
Juan Gonzalez, de id.	500
José Barreiro, de id.	500
Manuel Azromayor, de Ribela.	500
José Gonzalez, de Gustey.	500
Ayuntamiento de Nogueira de Ramuin.	
Maria de Soto, de id.	500
Martin Fernandez, de Carballeira.	500
Pedro Perez, de Viñas.	500
Ayuntamiento del Pereiro.	
José do Allo, de Sta. Maria de Meias.	500
Benito Vazquez, de id.	500
Ayuntamiento de la Peroja.	
Francisco Vazquez, de Armental.	300
Manuela Cudeiro, de Carracedo.	500
Bias Rodriguez, de id.	500
Doña Rita Suarez, de id.	500
Constantino Rivas, de Graices.	500
D. Juan de Novoa, de id.	500
Ramon Fernandez, de Villarrubin.	500
Ayuntamiento de S. Ciprian de Viñas.	
Angel Seara, de Soutopenedo.	500
Manuel Outeiriño, de Noalla.	500
José Gonzalez, de San Ciprian.	500
Francisco Pereiras, de idem.	500
Leonardo Sequeiros, de S. Clodio.	500
Rosa Gonzalez Richa, de idem.	500
Joaquin Losada, de Gargantás.	500
Ayuntamiento de Toén.	
Ignacio do Casar, de Alongos.	500
Ramon Areas, de Puga.	500
Manuel Dieguez, de idem.	500
Patricio Vieites, de Feá.	500
Cándida Martinez, de Moreira.	500
Ayuntamiento de Villamarin.	
Maria Aranzo, de Tamallancos.	500
Maria Lopez, de Boimorto.	500
José Caride, de Rio.	500
PARTIDO DE RIBADAVIA.	
Ayuntamiento de ídem.	
Manuel Perez, de Ventosela.	500
Ayuntamiento de Abion.	
José Castro Fernandez, de S. Justo.	500
Francisco de Barcia Casal, de id.	500
Maria Lorenzo y Lorenzo, de Córcores.	500
Ayuntamiento de Cenlle.	
Maria Alvarez y Arce, de Roza- monde.	500
PARTIDO DE TRIVES.	
Ayuntamiento de Castro Caldelas.	
Agustin Lamelas, de idem.	500
José Rodriguez, de Camba.	500
Antonio Prieto, de idem.	500
Ayuntamiento de Teijeira.	
Ignacio Fernandez, de Piedra- lita.	500
Agustin Gonzalez, de idem.	500
Angel Blanco, de Lumeares.	500
PARTIDO DE VERIN.	
Ayuntamiento de Castrelo del Valle.	
Manuel Gonzalez, de Servoy.	500
Ayuntamiento de Cualedro.	
Gerónimo Fernandez, de id.	500

Ayuntamiento de Ombra.	
D. José Colmenero Feijó, de id.	500
Benito Colmenero, de idem.	300
PARTIDO DE VIANA DEL BOLLO.	
Ayuntamiento de Villarino.	
Domingo Estevez, de Sabugido.	500
REPRODUCCION DE PRÉSTAMOS ANTERIORES.	
Ayuntamiento de San Amaro.	
Antonio de Castro, de Anlo.	500
Ayuntamiento de Cortegada.	
José Alan, de Refojos.	500
TOTAL.	30.500

Lo que se publica para conocimiento de los funcionarios y demás que adelan-
 zaron las instancias, por si tienen que
 objetar lo hagan con oportunidad segun
 y por los medios que por diferentes ve-
 ces está anunciado, esperando al mismo
 tiempo que con la lectura del Boletín,
 avisos y demás se está mandado, se
 participe con premura á los agraciados
 para que se presenten á recibir los pré-
 stamos á fin de atender á sus necesidades
 agrícolas en el término de un mes desde
 la insercion, transcurrido el cual queda
 sin efecto á no acreditarse que no llegó á
 su conocimiento, en cuyo caso se exigirá
 la responsabilidad á quien corresponda;
 los que por enfermedad ú otro causal
 justo no puedan concurrir personal-
 mente, autorizarán á medio de oficio cre-
 dencial de la alcaldia persona de su con-
 fianza que venga á recibir á su nombre; y
 los que no saben firmar se provistarán
 del mismo documento para la identidad
 de sus personas, ó se valdrán de las que
 merezcan confianza de esta capital para
 el mismo objeto.

Ortise 5 de diciembre de 1862.—
 E. G. P., Francisco Javier Camuño.—
 Santos Cid, Srio.

ADMINISTRACION PRINCIPAL
 DE HACIENDA PUBLICA DE LA PROVINCIA.

Cumpliendo los Ayuntamientos y re-
 caudadores con interés los deberes que
 les imponen las órdenes que tratan de la
 cobranza de los impuestos, es incuestio-
 nable la facilidad de ingresarlos en las
 arcas del Tesoro á sus respectivos ven-
 cimientos sin necesidad de medidas de
 rigor.

Convencida de esto la Administracion,
 y con el fin de evitarles las vejaciones
 consiguientes al uso de los apremios, les
 interesa para que se apresuren á solven-
 tarse en lo que resta del año, no solo
 de las contribuciones territorial, subsidio
 y consumos del cuarto trimestre, si tam-
 bien de sus recargos y los débitos que
 por anteriores hubiesen quedado pende-
 rantes de cobro; de forma que por fin
 de año queden saldadas las cuentas de
 todos los pueblos de la provincia.

Tambien se hace indispensable remi-
 tan los recibos de gastos municipales y
 premio de cobranza para que puedan
 formalizarse dentro del citado periodo.

Ortise diciembre 5 de 1862.—
 P. O., Florentino M. de Monge.

TERCERA SECCION.

Juzgado de primera instancia de Villalba.
 Don Luis Guemes Gay, juez de prime-
 ra instancia de la villa de Villalba y su
 partido.—Por virtud del presente llama-
 cito y emplazo á Antonio Martínez San-
 chez, natural de Arcos de la Frontera,
 provincia de Cadiz, á fin de que compa-

reza en este juzgado en el término de la ley para practicar con él las diligencias que están acordadas en causa criminal que contra el mismo voy formando por hurto de sesenta reales, una manta y hurto frustrado de un caballo con sus arreos á Vicente Villanovo, de la ciudad del Ferrol; aperebiéndole que de no hacerlo le parará el perjuicio que haya lugar.

Dado en Villalba á 19 de noviembre de 1862.—*Luis Coumes Gay*—Por su mandato, *Andrés Sanz*.

Idem de Ginzo de Limia.

El Lic. D. Bernardo Placer Feijó, juez de primera instancia de la villa de Ginzo de Limia y su partido.—Por el presente cito, llamo y emplazo á José Aguiar y Ojea y Tomás Fernández Noya, naturales y vecinos de Escornobois en este partido judicial, para que dentro del término de treinta días contados desde la inserción de este edicto en el Boletín oficial de la provincia, se presenten en este juzgado por la escribanía de D. Francisco Cadorniga, con objeto de ser citados y emplazados para ante la Audiencia del territorio de la sentencia pronunciada en primera instancia en causa que se les formó con otros por hurto de leñas y esquilmos de los montes comunales de su pueblo; pues pasados sin verificarlo, tendrá efecto aquella en los estrados del tribunal.

Ginzo de Limia noviembre 22 de 1862.—*Bernardo Placer Feijó*.—Por su mandato, *Francisco Cadorniga*.

Idem de Lalin.

Don José Andrés Iglesias, juez de primera instancia en comisión de la villa de Lalin y su partido.—Por el presente cito, llamo y emplazo á Manuel Soengas, de Santa María del Rio, y Domingo Guerra, de Santa Eulalia de Camba en este partido, para que dentro de treinta días siguientes á la inserción del presente en los Boletines oficiales se presenten en la pública de este juzgado á responder á los cargos que contra ellos resulten en causa de oficio pendiente sobre lesiones á D. Andrés Hermida, de Fafian; pues de no hacerlo, les parará el perjuicio que haya lugar, y el procedimiento continuará por su rebeldía en los estrados de esta audiencia. Al mismo tiempo se exorta á todas las Autoridades, Guardia civil y agentes de vigilancia, que siendo habidos dichos Soengas y Guerra, cuyas señas se expresan á continuación, procedan á su captura, remitiéndolos con seguridad á este juzgado.

Lalin noviembre 20 de 1862.—*José Andrés Iglesias*.—De su mandato, *Manuel Vila*.

Señales de Domingo Guerra.

Estatura regular, edad como de 26 años, barba poca, color trigueño; viste pantalón de estopa, chaleco usado de paño azul, chaqueta de punto y lana usada, sombrero portugués, zapatos gruesos á uso del país.

Idem de Manuel Soengas.

Estatura alta, edad 50 años, barba poca, color trigueño; viste pantalón de paño usado, chaleco de paño azul, chaqueta de punto y lana usada, sombrero de fábrica portuguesa, zapatos gruesos á estilo del país.

Idem del Carballino.

Don José Benito Covelo, escribano de número del juzgado de primera instancia de Carballino.—Certifico que en pleito civil que se sustanció por la escribanía de mi cargo recayó la sentencia de este tenor:

En la villa del Carballino á 22 días del mes de noviembre de 1862: El Licenciado

D. Rafael Gil y Olmedilla, juez de primera instancia de la misma y su partido, en el pleito de menor cuantía promovido por D. Jacinto Rodríguez como apoderado de D. José García de la villa y comercio de Maside, contra Benita Vidal del lugar de S. Pedro, parroquia de Santa María de Macendo, partido de Ribadavia, como hija que nació de Tomas Vidal y Josefa Fernandez, vecinos que fueron del pueblo de S. Amaro, en reclamación de 1,000 rs., resto de mayor partida á que se habian estos obligado por escritura pública hipotecaria:

Vistos:

Resultando que el D. Jacinto Rodríguez por la representación que ejerce con producción de una escritura pública de que dió fe D. Matias Vazquez, acudió con escrito al juzgado que es el que ocupa los folios tres y cuatro esponiendo que en virtud de aquella, Tomas Vidal y su esposa Josefa Fernandez á la seguridad de 5,000 rs. que estaban adeudando á su poderdante le hipotecaran entre otros bienes una casa nueva, sita en S. Amaro y contra la que habia llegado á su noticia agitará cuestion Miguel Rodriguez, por cuyo resultado quedara un sobrante á favor de los herederos de Tomas Vidal de 1,500 rs. cuya retención solicitaba; que estimada esta pretension dentro del término ordinario, propuso la oportuna demanda en juicio de menor cuantía por la cantidad de 1,000 rs. que era la que por déficit de 5,000 le quedaran adeudando, acompañando certificado del acto conciliatorio sin avenencia y las diligencias preparatorias, concluyendo por medio de otrosí que se hiciese saber al Miguel Rodriguez para que le obstase:

Resultando que conferido traslado por sexto día á Benita Vidal, única hija y heredera de los deudores, notificada personalmente así como el Miguel Rodriguez nada expusieron, cuyo término pasado siguió el expediente su curso pasando por el trámite de prueba y llevando las demas prescripciones legales, que la calidad del asunto requiere:

Considerando que D. José García en virtud del documento público que obra en autos adornado de los requisitos que se exigen para su validez, aparece acreedor hipotecario contra Tomas Vidal y su consorte Josefa Fernandez de 5,000 reales, aunque hoy limitada esta suma á la de 1,000 por estar datado de la diferencia:

Considerando que á la seguridad del crédito le asiste derecho real sobre la casa que cuestionó Miguel Rodriguez y se halla en su poder con un sobrante de 1,500 rs., los cuales debian pasar á la Benita Vidal; pero como de sucederá sus padres en los derechos, tiene que cubrir sus obligaciones porque el que contrae lo hace para si y sus herederos, siendo por lo mismo responsable de los 1,000 rs. que reclama D. José García, á quien tiene que entregárselos el Miguel en virtud de la retención que se le hizo:

Considerando que á falta de este sobrante podia el acreedor perseguir la casa hipotecada por mas que se hallase en terceros poseedores, atento á que las enagenaciones que de ella se practicasen, siempre llevaban consigo la responsabilidad del crédito reclamado:

Fallo: Que debia de condenar y condeno á Benita Vidal como hija única y heredera de Tomas Vidal y Josefa Fernandez al pago de la cantidad de 1,000 reales que quedaron adeudando á Don José García con las costas; en su consecuencia mando que Miguel Rodriguez por cuenta de los 1,500 rs. que en su poder estan retenidos como sobrante de la casa hipotecada, entregue dicha suma y las costas al expuesto Garcia, á segundo día de que esta sentencia cause ejecutoria y pasado se haga efectiva conforme á derecho:

Por esta definitivamente juzgando de la que se pase copia testimoniada al señor Gobernador civil de la provincia para

su inserción en el Boletín oficial por rebeldía de Benita Vidal y Miguel Rodriguez, lo pronuncio, mando y firmo.—*Rafael Gil y Olmedilla*.

Para que conste expido el presente en Carballino noviembre 22 de 1862.—*José Benito Covelo*.—V.º B.º—*Rafael Gil y Olmedilla*.

Idem de Allariz.

Don José María Rodriguez, escribano de número y del juzgado de primera instancia de Allariz.—Certifico que en pleito de tercera pendiente en dicho juzgado y por mi oficio sentenciado en rebeldía por los trámites establecidos en la ley, se dictó la sentencia que dice así:

En la villa de Allariz á 8 de noviembre de 1862. El Sr. D. José María Trucharte y Endara, juez de este partido, habiendo visto estos autos en este juzgado pendientes por autem el infrascripto escribano dijo:

Resultando que despachada ejecución á instancia del procurador D. José María Gonzalez en nombre de Dionisio Gil, vecino de Solveira de Belmonte, en virtud de cierta obligación privada contra José Villar Ferreira, vecino del lugar de Payoso, otorgada en primero de diciembre de 1859, bajo la fianza de Bartolomé Pumar que lo es de Santiago da Costa, se embargaron varios bienes inmuebles, semovientes y raíces encontrados en casa de Francisco Villar, padre del ejecutado en concepto de que eran de la pertenencia de su citado hijo José:

Resultando que con dicho motivo el referido Francisco Villar produjo escrito de tercera alegando eran de su propiedad los bienes embargados como de su hijo que casado y fuera de la patria potestad, tampoco vivia en su compañía, y aunque accidentalmente en el mes de setiembre último le facilitara una casa en que guarecerse por haber salido de la de sus suegros, por cuya compañía vivia aquel, ningunos bienes tenia de su propiedad y pidiendo en consecuencia se declaren dichos bienes embargados del dominio del Francisco mandando el desembargo de ellos y que se dejen á su libre disposición:

Resultando que emplazados con esta demanda ejecutante y ejecutado el primero, se presentó como parte, en estos autos y sin negar los hechos alegados por el demandante, concretó su pretension á que el fiador Bartolomé Pumar saliese á los autos á manifestar si fuera de los bienes embargados por el alguacil Serantes, el José Villar tenia algunos propios del mismo para hacer traba en ellos si no queria se declarase insolvente y continuase la ejecución contra él, por el segundo se declaró en rebeldía, por lo que relativamente á él se entendieron los autos en los estrados de este juzgado:

Resultando que estimada la pretension del ejecutante, confiriendo traslado al fiador Bartolomé Pumar, tambien este se declaró en rebeldía:

Resultando que seguidos los autos por sus trámites, sin mas alegaciones que las referidas en el de prueba, se presentaron por el tercerista cuatro testigos con objeto de justificar los hechos alegados; y Considerando que examinadas sus declaraciones y hecho de ellas el debido exámen crítico legal que previene el artículo 517 de la ley de Enjuiciamiento civil se encuentra en ellas la fuerza probatoria suficiente de la acción y demanda del tercerista:

Considerando que aunque les faltase algo para el convencimiento legal de que los bienes embargados eran propios del tercerista, quedaba suficientemente suplido con la conducta en estos autos observada por el ejecutante, pues ella sola fuera de la implícita confesion que envuelve de que los bienes embargados no son del ejecutado José Villar, bastaria para convencerlo así porque de otra suerte no solo habria negado al tercerista

la propiedad de ellos, sino que tambien habria cuando menos intentado justificar aunque no lo hubiera conseguido que eran propios de su deudor el ejecutado José Villar:

Considerando en fin que los bienes de su padre el Francisco, no pueden legalmente servir para responder de las deudas contraídas por el repetido su hijo:

Falta que declarando como declara de la pertenencia del demandante Francisco Villar, los bienes que resultan embargados por el alguacil Serantes, segun aparece del certificado inicial de estos autos, debe por consecuencia mandar y manda se dejen á la libre disposición del repetido tercerista, alzándose inmediatamente el embargo de ellos.

Así por esta su sentencia que en su caso se haga notoria conforme á lo prevenido en el artículo 1,190 de la ley de enjuiciamiento civil, definitivamente juzgando en rebeldía del ejecutado, sin hacer especial condenación de costas, lo pronuncio, mandó y firma dicho señor Juez de que yo el escribano doy fe.—*José María Trucharte y Endara*.—Autem, *José María Rodriguez*.

Para que conste, insertándolo en el Boletín oficial, conforme á lo prevenido, expido el presente que firmo en este pliego entero del sello que se reconoce, con el V.º B.º del señor Juez.

Allariz noviembre 25 de 1862.—*José María Rodriguez*.—V.º B.º—*José Trucharte y Endara*.

Ayuntamiento de Gudiña.

Se hace saber á los vecinos y forasteros de este distrito que hayan tenido alteración total ó parcial en los capitales consignados en el repartimiento del corriente año, presenten en esta Consistorial dentro de los ocho días siguientes á la inserción de este anuncio en el Boletín oficial, sus instancias, expresando las fincas que sean objeto del movimiento y acompañando el título que acredite la variación de poseedor con la toma de razón en el registro de la propiedad, para en su vista hacer la alta y baja correspondiente en el primer semestre del año entrante.

Gudiña noviembre 26 de 1862.—E. A., *Antonio Barja*.

Idem de Cualedro.

Esta Corporacion en sesion del 23 del corriente, acordó por tercera vez que mediante en este distrito no se ha presentado aspirante alguno á la plaza de Médico-cirujano para la asistencia de las familias pobres, dotada con el sueldo de 4,000 rs. consignados en el presupuesto por el Sr. Gobernador civil de la provincia.

Los aspirantes á ella presentarán sus solicitudes documentadas en la Secretaría de este Ayuntamiento en el término de treinta días, á contar desde que se inserte este anuncio en la Gaceta de Madrid: durante este mismo se hallarán de manifiesto en la referida Secretaría las condiciones bajo las que se ha de proveer dicha plaza.

Cualedro noviembre 27 de 1862.—E. A. P., *Julian Fernandez*.—P. A. D. A., *Manuel Perez*, Secretario.